

MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA TRAMITACIÓN DEL ENCARGO A LA EMPRESA “TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A., S.M.E., M.P.” (TRAGSATEC), PARA EL SERVICIO DE APOYO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA, EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PROPIOS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y EL DERECHO A LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

El objeto del presente encargo es la prestación por parte de la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios S.A., S.M.E., M.P.” (TRAGSATEC) del servicio de apoyo técnico a la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia (en adelante DG) perteneciente a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, para la gestión administrativa de las solicitudes de dependencia y más concretamente en dar apoyo a los diferentes equipos y unidades en los siguientes aspectos:

- recepción de documentación desde las bandejas de registro,
- grabación de expedientes en la aplicación SIDM_AD,
- requerimiento de documentación, en caso necesario
- subsanación de los expedientes, incluyendo la recepción de la documentación aportada por los interesados o sus representantes.
- generación de notificaciones.
- gestión de los procedimientos de traslados entre Comunidades Autónomas.
- en los procesos adicionales que surgiesen fruto de la actividad propia del Área de Gestión del Procedimiento de Dependencia

Esta actuación técnica será realizada por TRAGSATEC, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 y en la disposición adicional vigésimo cuarta, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y en el Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC).

Según lo que recoge el artículo 26.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, *“la Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en el presente Estatuto, tiene competencia exclusiva en las siguientes materias: (...) 23. Promoción y ayuda a la tercera edad, emigrantes, minusválidos y demás grupos sociales necesitados de especial atención, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación.”*

En desarrollo del mencionado artículo del Estatuto de 1983, el 13.2 del Decreto 241/2023, de 20 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, establece que corresponde a la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia *“La valoración y el reconocimiento de las situaciones de dependencia y la elaboración de los programas individuales de atención de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.”* Asimismo, según el artículo 13.4, compete a esta Dirección General *“La adjudicación y, en su caso, gestión de los servicios y prestaciones económicas del catálogo de dependencia en coordinación con otros centros directivos y organismos de la Comunidad de Madrid y con las entidades locales”*.

Así pues, la política de dependencia, desde su reconocimiento como política pública particular a partir de la aprobación de normativa específica en el año 2003, ha constituido una parte fundamental en el apoyo a la mejora de la calidad de vida de las personas dependientes, siendo las mismas un grupo social especialmente vulnerable porque, como se recoge en la obra *Autonomía, dependencia y servicios sociales*, aún en una misma persona uno o varios factores socioeconómicos que, de por sí, dificultan su integración social, su participación en la economía y la salvaguarda de sus derechos y promoción de sus libertades. Estos factores son, fundamentalmente, la edad (especialmente, edades muy avanzadas pertenecientes al conocido como envejecimiento del envejecimiento), la discapacidad, la enfermedad, el sexo (se habla de una feminización de la dependencia en los estratos poblacionales de más edad), la capacidad económica y el origen geográfico de la persona.

En consecuencia, los trabajos realizados para fomentar el bienestar y la garantía de derechos de las personas dependientes se configuran como una política pública de importancia que se ha consolidado como tal en los últimos 20 años.

Desde la Comunidad de Madrid, se ha estructurado la política de dependencia mediante, en primer lugar, la aprobación del Decreto 63/2003, de 20 de julio, por el que se creó la Dirección General de Coordinación de la Dependencia, antecedente directo de la actual Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia. Así, nace el órgano competente en cuestiones relativas a la coordinación y gestión de los servicios y la prestación de la atención social a las personas dependientes.

Desde entonces, los poderes públicos han desarrollado una política que en la Comunidad de Madrid se ha traducido en la implementación de medidas recogidas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que regula las condiciones básicas de acceso al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), configurando así una serie de nuevos servicios sociales que complementaban la acción protectora y daban respuesta a las necesidades de atención de las personas en situación de dependencia.

A esta norma estatal le siguieron hasta otras tres que procuraron adaptar la Dependencia como política pública a las vicisitudes del contexto económico, como fueron el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público; el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en presupuesto, tributaria y financiera para corregir el déficit público; y el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Así, se configuró un sistema legislativamente disperso al que, mediante la aprobación del vigente *Decreto 54/2015, de 21 de mayo, por el que se regula el procedimiento para reconocer la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid*, se le dio cohesión y unidad. Además, por medio de este Decreto, la Comunidad de Madrid se dota de un procedimiento claro que fomenta la accesibilidad del ciudadano a las ayudas públicas mediante la previsión de los medios digitales como vía de solicitud y comunicación entre la Administración de la Comunidad y los ciudadanos, así como con las administraciones municipales.

Al mencionado desarrollo legislativo de la política pública en materia de dependencia le ha acompañado un desarrollo poblacional. Es decir, la configuración de la población madrileña ha variado acorde con la española reflejando así los siguientes fenómenos.

El primero de ellos es el envejecimiento poblacional. Esto desemboca en una población potencialmente dependiente creciente, siempre que entendamos que la dependencia puede provenir tanto de la enfermedad, como de la edad, como de la discapacidad; pero que, en cualquier caso, es una condición que dificulta o impide la realización de las actividades básicas de la vida diaria y que es de carácter permanente.

Esta población potencialmente dependiente se añade a aquella que ya ha sido reconocida como dependiente y que, a causa de su avance en las etapas vitales, se perpetúa en el tiempo. Es decir, no solo se incrementa el número de usuarios, sino que estos lo son durante más tiempo, lo que redundará en un mayor número de solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia, de solicitudes de revisión por agravamiento, de solicitudes de modificación de los Programas Individuales de Atención, de solicitudes de traslados interautonómicos y, además, de las notificaciones y requerimientos que acompañan el curso de cada expediente.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) la población madrileña actual de más de 65 años representa el 18,43 % del total de la Comunidad, mientras que en el global nacional esta población representa ya el 20,15%. No obstante, la deriva para ambos es muy similar según la proyección del INE y es que, en los próximos 20 años, esta población aumentará en algo más de 10 puntos porcentuales en ambos casos. Lo cual, comparado con el aumento de 4 puntos porcentuales que ha tenido lugar desde el año 2003 hasta el día de hoy, da una idea de la rapidez con la que

se espera que crezca el número de potenciales usuarios de las prestaciones por dependencia.

Al factor del envejecimiento de la población, se le añaden otros como el de la creciente movilidad geográfica de la población hacia polos como Madrid y los municipios que conforman su área suburbana, causas de carácter económico o la mayor disponibilidad de información, que facilita que estas medidas de apoyo social puedan ser conocidas entre grupos poblacionales que antes no tendrían fácil tal acceso.

Vista la proyección futura de la población, es también importante estudiar cómo esas tendencias ya tienen efectos sobre la gestión de la política de dependencia. Ejemplo especialmente ilustrativo es el aumento del volumen de expedientes que se tramitan anualmente. Así, de acuerdo con los datos obrantes en nuestra aplicación de tramitación de expedientes SIDM_AD, en el año 2022 creció en un 11% respecto al año anterior, en el año 2023, un 24% y, en los meses transcurridos en el año 2024, un 10%.

También puede aludirse a que, según la Estadística Anual de la Dependencia del IMSERSO, desde el año 2016 al año 2022 la Comunidad de Madrid ha pasado de prestar el 9,35% del total nacional de prestaciones por dependencia al 12,23%, siendo así la tercera autonomía en volumen relativo después de Cataluña con un 17,10% del total nacional y Andalucía con un 20,86%.

Este desarrollo de la política social que es la de dependencia, junto con la relevancia que adquiere de cara al desarrollo poblacional de la Comunidad de Madrid hacen necesario, para garantizar el éxito de la misma, que esta se encuentre acompañada de una dotación de recursos acorde.

Sin embargo, en los últimos tiempos y más concretamente en el último año ha tenido lugar una reestructuración de los recursos humanos que hace que a día de hoy no se cuente con una estructura adecuada de personal, para dar trámite al incremento de solicitudes existente, y esto presenta el riesgo de que se traslade a la bajada de calidad del servicio prestado.

De este modo, tras los procesos de estabilización celebrados, las jubilaciones acaecidas y el carácter temporal de algunos de los contratos del personal laboral, se hace inviable plantear las tareas propias de la Subdirección General de Gestión y Tramitación del Procedimiento de Dependencia con los niveles de eficacia y de calidad que permiten alcanzar los objetivos establecidos.

Visto que de momento no se cuenta con los recursos previstos de plantilla, y su dotación actual aún es insuficiente, se ha valorado la conveniencia de establecer un encargo a **TRAGSATEC** debido a la experiencia acumulada en el apoyo a la gestión de trabajos similares en otras consejerías.

La empresa TRAGSATEC, es un medio propio instrumental y de servicio técnico de la Administración, tanto de la Administración General del Estado, como de las Comunidades Autónomas y de los poderes adjudicadores dependientes de aquella y de éstas, estando obligada a realizar los trabajos y actividades que les sean encomendados por las entidades referidas, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 y en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y en el Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) y de su filial Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC), está previsto en las normas citadas, por lo que se considera oportuno para el cumplimiento de los fines perseguidos.

La viabilidad de encargar a TRAGSATEC el apoyo en la gestión de expedientes se fundamenta en que puede realizar la gestión, administración y supervisión de cualquier tipo de asistencias y servicios técnicos en otros sectores de la actividad administrativa, mediante la adaptación y aplicación de la experiencia y conocimientos desarrollados en sus ámbitos propios.

TRAGSATEC, acredita una amplia experiencia en la realización de tareas de apoyo administrativo a la gestión de diferentes trabajos dentro de la administración, por lo que se entiende que TRAGSATEC tiene experiencia suficiente que puede ser adaptada y aplicada a la concreta tarea que se pretende encargar a través de este expediente.

Por todos los motivos anteriormente desarrollados se considera que este Encargo es la opción más eficiente para conseguir el adecuado apoyo a la gestión del trabajo que es objeto del mismo.

Las actuaciones a encargar están comprendidas dentro del objeto social de TRAGSATEC y específicamente en el apartado h) del artículo 2 de los Estatutos de TRAGSATEC, que señala las siguientes:

“La elaboración o realización de todo tipo de estudios, planes, proyectos, direcciones de obra, memorias, informes, dictámenes y, en general, todas las actividades de ingeniería y asesoramiento técnico, informático, económico o social, y cualquier tipo de consultoría y asistencia técnica y formativa en materia de gestión, organización, recopilación, tratamiento y digitalización documental, de gestión y de conformación de bibliotecas, registros y archivos, ya sean de texto, de imágenes o sonido, en cualquier soporte, incluidos los multimedia, y de gestión de protocolos en general también en cualquier soporte, para las diferentes Administraciones Públicas, así como sus organismos dependientes y las entidades de cualquier naturaleza vinculadas a aquellas”.

Este encargo a TRAGSATEC, cuyo coste total alcanzaría la cuantía de **355.866,57 €**, según presupuesto presentado por la citada empresa, se justifica por la necesidad de dar salida al incremento de solicitudes de dependencia y a fin de poder resolver las mismas en el tiempo máximo establecido en la legislación.

El encargo no supone en ningún caso por parte de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, la cesión de titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad de la Consejería dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la actividad material objeto de este encargo, con una duración que va desde la notificación del encargo hasta 9 meses después del inicio del mismo.

Madrid, a fecha de la firma

EL DIRECTOR GENERAL DE ATENCION AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA